

Rancagua, siete de septiembre de dos mil veintiuno.

**VISTOS:**

Comparece el abogado Juan Pablo Abello Gómez en representación de la parte demandante, y deduce recurso de nulidad en contra de la sentencia definitiva de 24 de marzo del presente año, pronunciada por el Primer Juzgado de Letras de San Fernando en sus antecedentes RIT O-33-2020, que rechazó la demanda de indemnización de perjuicios en accidente del trabajo, deducida por Rubén Alejandro Gallardo Leyton en contra de Sociedad de Inversiones y Áridos San Vicente Limitada; de Sociedad Áridos San Vicente Limitada; de Áridos e Inversiones San Vicente Limitada; de Sociedad de Transportes Messen Transporta Limitada; y, de Sociedad Inmobiliaria y de Inversiones M y G Limitada, todas representadas por José Horacio Messen González, y en contra de José Horacio Messen González, invocando primeramente la causal absoluta de nulidad del artículo 477 del Código del Trabajo, y en subsidio, la del artículo 478, letra e), del mismo texto normativo.

En la audiencia de la vista del recurso, los apoderados de la parte demandante y de las demandadas Sociedad de Inversiones y Áridos San Vicente Limitada; Sociedad de Transportes Messen Transporta Limitada; y, Sociedad Inmobiliaria y de Inversiones M y G Limitada, alegaron por las pretensiones de sus representados hechas valer en estos antecedentes.

Finalizada las exposiciones de los intervinientes se puso término al debate, quedando la causa en estado de alcanzar acuerdo y producido éste, se procede a dictar el siguiente fallo.

**CONSIDERANDO:**

**Primero:** Que la demandante hace consistir el arbitrio de nulidad primeramente, en el motivo absoluto del artículo 477 del Código del Trabajo, esto es, por haberse dictado el fallo con infracción de ley que haya influido sustancialmente en lo dispositivo del mismo, denunciando como normas infringidas las de los artículos 184 del Código del Trabajo y 69 de la Ley N° 16.744, en razón de que la demandada no tomó todas las medidas de seguridad para proteger eficazmente la salud y vida del trabajador demandante, por lo que procede hacer efectiva su responsabilidad contractual.

Refiere que el tribunal a quo hizo una interpretación restrictiva de las normas relativas al deber de seguridad del empleador, contraria al alcance jurisprudencial de la misma, llegando a su conclusión en base al documento procedimiento de trabajo seguro, sin saber si el trabajador lo entendió o tenía aptitud para entenderlo, pues sólo tiene 8° básico. Añade que al contestar la demanda el empleador señaló que don Héctor Guzmán, jefe directo del actor y quien daba las órdenes no se encontraba en la planta de áridos ni en el lugar del accidente, lo que fue desvirtuado por sus propios testigos, por



el perito, y por el testigo señor Salvador Moreno, por lo que habiendo mentido en este punto, se pone en tela de juicio y derrumba todo el relato que efectúa de los hechos.

Explica que la infracción de ley que denuncia tuvo influencia sustancial en lo dispositivo de la sentencia, pues de no haberse incurrido en ella el resultado de lo obtenido en el juicio por el demandante habría sido totalmente distinto. Cita jurisprudencia en apoyo de sus asertos.

Seguidamente en subsidio, invoca la causal del artículo 478, letra e), del Código del Trabajo, pues la sentencia se habría pronunciado con omisión del requisito del artículo 459 N° 4, del mismo código, por haberse omitido el análisis de toda la prueba rendida.

Explica que el sentenciador llega a la convicción de que no hay culpa de la empresa en base al procedimiento de trabajo seguro, sin analizar que el empleador miente respecto del hecho que el señor Héctor Guzmán no se encontraba en el lugar del accidente, tampoco las declaraciones de los testigos presenciales del accidente, ni el informe pericial, en aquella parte que el experto señala no constarle que la señalización de peligro estuviera antes del accidente, de todo lo cual queda de manifiesto la responsabilidad de la demandada. Concluye indicado que el vicio que reclama tuvo influencia sustancial en lo dispositivo, pues de no haberse incurrido en el la empresa hubiere sido declarada culpable del accidente.

En base a su razonamiento reseñado en los párrafos anteriores, solicita se anule la sentencia recurrida y se dicte la de reemplazo, sin perjuicio de la facultad de esta Corte para acoger el recurso por alguna causal del artículo 478 del Código del Trabajo, distinta de la alegada.

**Segundo:** Que siendo el recurso de nulidad de derecho estricto, la competencia de esta Corte queda limitada a la revisión de la validez de la sentencia en consideración a las causales alegadas al efecto por los intervinientes, siendo preciso dejar establecido respecto de la invocada, que la infracción de ley obedece exclusivamente al juicio de derecho contenido en la sentencia, esto es, a la determinación de la norma aplicable al caso, al modo como debe ser usada, y a las consecuencias jurídicas que derivan de dicha operación, de tal modo, debe entenderse que el recurrente no ataca los hechos y menos pretende su modificación, aceptando por lo tanto los establecidos en la sentencia, quedando limitada la competencia de esta Corte a estudiar si el proceso de subsunción fue correctamente realizado. En otras palabras, su propósito esencial está en fijar el significado, alcance y sentido de las normas, en función de los hechos que se ha tenido por probados.

Al mismo tiempo, cabe señalar que el motivo en estudio se configura cuando la ley que se dice infringida se ha aplicado a casos no regulados por la misma; cuando no se ha aplicado a los casos específicamente regulados por ésta; o, cuando habiéndose



aplicado, no lo ha sido en forma correcta, siendo indispensable, en virtud de lo dispuesto en el mencionado artículo 477 del Código del Trabajo y reafirmado en el inciso tercero del artículo 482, que la referida infracción tenga influencia sustancial en lo dispositivo del fallo, es decir, que sea ésta y no otra consideración la que lleve a resolver en el sentido que lo hizo el sentenciador.

**Tercero:** Que en consecuencia de lo indicado en el motivo precedente, se dejarán asentados los siguientes hechos relevantes, constatados por esta Corte como resultado del estudio de la sentencia en revisión: a. entre don Rubén Alejandro Gallardo Leyton y Sociedad Inversiones y Áridos San Vicente, con fecha 14 de junio de 2018 se celebró un contrato de trabajo en virtud del cual el primero se desempeñaría como mecánico; b. el 23 de octubre de 2018, mientras el trabajador revisaba el camión patente ZK-4531 que tenía acoplada la batea patente JF-2600, reventó un amortiguador de los ejes de las ruedas, ocasionándole lesiones diagnosticadas como contusión leve de hombro derecho; cuerpo extraño ocular conjuntival bilateral; contusión craneal; conjuntivitis; barotrauma acústico; trastorno de adaptación y trastorno de estrés agudo; c.- la Comisión Evaluadora por Accidentes del Trabajo, mediante Resolución N° 20200384 de 28 de febrero de 2020, calificó al actor con un 35% de incapacidad laboral permanente, con secuelas de disminución de agudeza visual, cefalea post tec, e hipoacusia mayor derecha; d.- el empleador entregó al trabajador el documento llamado procedimiento de trabajo seguro, y este último asistió a una charla de seguridad realizada por el prevencionista de riesgos de la empresa; e.- el empleador entregó al actor elementos de seguridad personal; f.- al momento del accidente el administrador de planta don Héctor Guzmán Magaña se encontraba con permiso, siendo avisado del siniestro por la secretaria; g.- el demandante no cumplió lo dispuesto en el documento procedimiento de trabajo seguro, ni portaba anteojos de seguridad.

**Cuarto:** Que de conformidad con lo previsto en el artículo 184 del Código del Trabajo, el empleador estará obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los [trabajadores](#), informando de los posibles riesgos y manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas, como también los implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales. Deberá asimismo prestar o garantizar los elementos necesarios para que los [trabajadores](#) en caso de accidente o emergencia puedan acceder a una oportuna y adecuada atención médica, hospitalaria y farmacéutica.

Recayendo la prueba de la diligencia o cuidado en quien ha debido emplearla, debe concluirse que, en la especie, era el empleador demandado quien debió acreditar suficientemente no sólo que adoptó medidas de seguridad, sino además y fundamentalmente, que estas fueron efectivas para el cumplimiento del objetivo esencial perseguido, esto es, proteger la vida y seguridad del trabajador. En este orden de



consideraciones, cabe consignar que la Excma. Corte Suprema ha declarado que frente a un accidente del trabajo – como lo fue el de autos -, se presume que el empleador no tomó las medidas de seguridad necesarias para evitarlo, o que las que adoptó fueron insuficientes o inapropiadas, lo que corrobora la tesis que recae en el demandado la carga probatoria.

**Quinto:** Que en relación con el deber de seguridad del empleador, la doctrina ha entendido que se trata de una obligación dinámica, pues las circunstancias variables en las cuales se prestan los servicios remunerados, determinan también la forma como debe ser prevenidos los riesgos inherentes a ellos.

Es por eso que la norma del artículo 184 del Código del Trabajo *“...debe ser interpretada y aplicada en su mérito, esto es, atendida la finalidad para la cual fue establecida, que no es otra que la de situar en el empleador el deber de seguridad respecto de los riesgos de su propia actividad, porque es él quien cuenta con las herramientas, los conocimientos y los recursos necesarios para realizar en el ámbito de sus operaciones, una eficaz labor preventiva de riesgos laborales.”* (María Cristina Gajardo Harboe, “El Deber de Seguridad”, Revista Chilena del Trabajo y Seguridad Social, Vol. 5, N° 9, 2014, pg. 22)

**Sexto:** Que en base a lo razonado previamente, las medidas adoptadas por la demandada Sociedad Inversiones y Áridos San Vicente, consistentes en haber entregado el documento procedimiento de trabajo seguro, impartido una charla de capacitación, y proporcionar algunos elementos de seguridad personal, no resultaron ser suficientes para asegurar eficazmente la integridad física de don Rubén Alejandro Gallardo Leyton, en razón de que el 23 de octubre de 2018 omitió controlar que el empleado utilizara dichos implementos y que pudiera efectivamente cumplir el procedimiento de trabajo seguro, puesto que ese día el administrador de planta y jefe directo del demandante se encontraba ausente, con permiso, sin que conste la designación de otra persona en su reemplazo, nombramiento que no solo era necesario para el cumplimiento del deber de cuidado que le asistía, sino que – y esto es esencial -, resultaba obligatorio al tenor del documento procedimiento de trabajo seguro, conforme al cual el trabajador que detecte condiciones de riesgo deberá informar de ello a su jefe directo, cosa que el señor Gallardo se vio impedido de hacer por un hecho o causa imputable al empleador.

Así las cosas, pura y simplemente cabe concluir que la Sociedad Inversiones y Áridos San Vicente Limitada infringió el deber de seguridad a que se encontraba obligada, por el hecho de no haber respetado las normas que ella mismo dictó para asegurar la salud e integridad física de sus trabajadores.

**Séptimo:** Que en base a lo razonado previamente, la interpretación restrictiva que el juez a quo hace de la norma contenida en el tantas veces nombrado artículo 184 del Código del Trabajo es errada, pues concluye que el empleador adoptó *“todas las*



*medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud”* del actor, sin considerar la ausencia total de control y fiscalización existente en el establecimiento donde se desempeñaba el día 23 de octubre de 2018, que permitió realizara una labor riesgosa sin usar la protección debida, y le impidió, al mismo tiempo, dar cumplimiento a las disposiciones del documento trabajo seguro, todo lo cual contribuyó de manera determinante a que se sufriera un accidente laboral que disminuyó, permanentemente, en un 35% su capacidad de trabajo, por lo que habiéndose constatado que el proceso de subsunción fue incorrectamente realizado, la sentencia recurrida ha de ser invalidada como se dirá.

**Octavo:** Que en razón de haberse acogido el recurso por la primera de las causales alegadas, se omitirá pronunciamiento en relación con el motivo invocado de modo subsidiario.

Con lo razonado y lo dispuesto en los artículos 184 y 477 y siguientes del Código del Trabajo, se **ACOGE** el recurso de nulidad deducido por el abogado Juan Pablo Abello Gómez, en representación de Rubén Alejandro Gallardo Leyton, en contra de la sentencia definitiva de 24 de marzo del presente año, pronunciada por el Primer Juzgado de Letras de San Fernando en sus antecedentes RIT O-33-2020, que rechazó la demanda de indemnización de perjuicios por accidente del trabajo, deducida en contra de Sociedad Inversiones y Áridos San Vicente Limitada; Sociedad Áridos San Vicente Limitada; Áridos de Inversiones San Vicente Limitada; Sociedad de Transportes Messen Transporta Limitada; y, Sociedad Inmobiliaria y de Inversiones M y G Limitada, todas representadas por José Horacio Messen González, y en contra de José Horacio Messen González, y en consecuencia, se **invalida** y **reemplaza** por la que se dicta, separadamente, a continuación.

Regístrese, comuníquese e incorpórese al sistema.

Redacción del abogado integrante Alberto S. Veloso Abril.

**Rol Corte 374-2020 Reforma Laboral.**

Ricardo De Dios Pairican Garcia  
MINISTRO  
Fecha: 07/09/2021 14:41:54

Joaquin Ignacio Nilo Valdebenito  
FISCAL  
Fecha: 07/09/2021 15:17:09



KYXNKLKXS

Alberto Salvador Veloso Abril  
ABOGADO  
Fecha: 07/09/2021 13:51:01



Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Rancagua integrada por Ministro Ricardo Pairican G., Fiscal Judicial Joaquin Ignacio Nilo V. y Abogado Integrante Alberto Salvador Veloso A. Rancagua, siete de septiembre de dos mil veintiuno.

En Rancagua, a siete de septiembre de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Rancagua, siete de septiembre de dos mil veintiuno.

En cumplimiento a lo precedentemente resuelto y a lo dispuesto en el artículo 478 del Código del Trabajo, se emite enseguida y sin nueva vista, la siguiente sentencia de reemplazo con arreglo a la Ley.

**VISTOS:**

Se reproduce la sentencia que se reemplaza, con excepción de sus motivos octavo a décimo quinto, que se eliminan.

**Y TENIENDO ADEMÁS PRESENTE:**

**Primero:** Que considerando los argumentos desarrollados en los motivos de la sentencia de nulidad, se encuentra suficientemente acreditado que don Rubén Alejandro Gallardo Leyton, el día 23 de octubre del año 2018 sufrió un accidente laboral atribuible a culpa del empleador, a consecuencia del cual sufrió disminución de agudeza visual en ambos ojos; cefalea post tec; e hipoacusia bilateral mayor derecha, con grado total de incapacidad laboral permanente del 35%, según da cuenta la Resolución de Incapacidad Permanente N° 20200384, de 28 de febrero de 2020.

**Segundo:** Que el actor demanda para el resarcimiento de los perjuicios sufridos, el pago del lucro cesante y del daño moral.

**Tercero:** Que en relación con el primero de los rubros señalados, esto es, el lucro cesante, con el mérito de los elementos de convicción agregados al proceso, apreciados conforme a la sana crítica, conducen a esta Corte a la convicción que el actor sufrió un daño grave a causa del accidente laboral materia de autos, concurriendo presupuestos objetivos y probados, que dan cuenta de la existencia de secuelas invalidantes y funcionales que le significan detrimento en su capacidad de ganancia, dificultando el acceso a futuros trabajos para ejercer tanto las labores de mecánico que desempeñaba, como cualquier otra, que requiera de la agudeza visual o auditiva que poseía previo al siniestro que lo afectó.

**Cuarto:** Que el lucro cesante, para ser indemnizado, debe ser necesariamente cierto, sin que ello conlleve una certeza absoluta, por la configuración y naturaleza del daño, sino a una de carácter relativo, que debe fundarse en antecedentes reales, objetivos y probados.

En este orden de ideas el lucro cesante resulta ser más bien un juicio de probabilidades, cuyo resultado puede no ser exacto, pero sí ha de sostenerse en consideraciones fundadas y razonables, dentro de un contexto de normalidad, y atendidas las circunstancias del caso, debiendo considerar variables tales como, por ejemplo la edad de la víctima; su condición de salud; su calificación; y las características del trabajo que desarrollaba.

**Quinto:** Que en consecuencia, para resolver esta Corte considerará tanto el mérito de la Resolución de Incapacidad Permanente que da cuenta de afectarle al actor





una incapacidad del 35% como consecuencia del accidente sufrido, e igualmente, lo dispuesto en el artículo 34 de la ley 16.744, que considera inválido parcial a quien haya sufrido una disminución de su capacidad de ganancia, presumiblemente permanente, igual o superior a un 15% e inferior a un 70%, categoría dentro de la cual se encuentra el señor Gallardo.

Del mismo modo, se atenderá al contenido del artículo 59 de la citada ley, en cuanto las declaraciones de incapacidad de un accidentado, se hacen en función de su incapacidad para procurarse, por medio de un trabajo proporcionado a sus actuales fuerzas, capacidad y formación, una remuneración equivalente al salario o renta que gana una persona sana en condiciones análogas y en la misma localidad, apareciendo razonable, en tal circunstancia, sea un referente para determinar el perjuicio patrimonial por esta causa, entendiendo que los ingresos futuros del demandante deberían verse disminuidos en similar proporción.

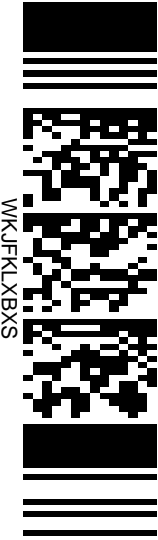
**Sexto:** Que al tenor de lo razonado en la sentencia de nulidad, el actor cursó hasta octavo año de enseñanza básica, por lo que en ausencia de elementos de convicción que permitan situar sus ingresos en un nivel superior, se considerará que como contraprestación a ellos pudo, en lo sucesivo, acceder al ingreso mínimo garantizado de \$300.000 (trescientos mil pesos) mensuales.

Para idénticos efectos, se considerará también su edad a la fecha del siniestro, esto es, 26 años, y que su oficio de mecánico demanda agudeza visual y auditiva, circunstancias todas que permiten una acertada estimación de la pérdida en su capacidad de trabajo durante el período productivo de su vida laboral, esto es, hasta la edad de 65 años, requisito que la ley establece para obtener pensión de vejez.

El porcentaje de incapacidad que afecta al actor, aplicado sobre el monto del ingreso mínimo garantizado, arroja un total de \$105.000 mensuales, y restando 39 años para su jubilación, el lucro cesante asciende a cuarenta y nueve millones ciento cuarenta mil pesos (\$49.140.000).

**Séptimo:** Que seguidamente el actor reclama el pago del daño moral ocasionado por el accidente, entendido este como la legítima angustia, aflicción y padecimiento emocional sufrido como consecuencia del siniestro a raíz del cual vio mermada su capacidad física, permanentemente y a temprana edad.

Al respecto es deber señalar que el daño moral, atendida la naturaleza de sus componentes, es desde luego una cuestión difícil de aquilatar y ponderar pecuniariamente; por ello, para determinarlo adecuadamente se hace necesario recurrir a los baremos jurisprudenciales obtenidos de la comparación de casos similares, ejercicio que luego de haber sido realizado por estos sentenciadores, y considerando la edad del demandante y el porcentaje de incapacidad que le afecta, permite ponderar



prudencialmente en quantum indemnizatorio por el padecimiento emocional sufrido, en la suma de diez millones de pesos (\$10.000.000).

**Octavo:** Que finalmente corresponde analizar si el empleador Sociedad Inversiones y Áridos San Vicente Limitada y las demandadas Sociedad Áridos San Vicente Limitada; Áridos e Inversiones San Vicente Limitada; Sociedad de Transportes Messen Transporta Limitada; Sociedad Inmobiliaria y de Inversiones M y G Limitada y José Horacio Messen Gómez, constituyen una unidad económica, en los términos descritos en el inciso 4º, del artículo 3, del Código del Trabajo, que dice: *‘Dos o más empresas serán consideradas como un solo empleador para efectos laborales y previsionales, cuando tengan una dirección laboral común, y concurren a su respecto condiciones tales como la similitud o necesaria complementariedad de los productos o servicios que elaboren o presten, o la existencia entre ellas de un controlador común.’*

Como cuando el sentido de la ley es claro no debe desatenderse su tenor literal, es necesario concluir que los requisitos para la existencia de la unidad económica son: a. dirección laboral común y b. otras condiciones tales como similitud o complementariedad de los productos o servicios, o la existencia de un controlador común.

**Noveno:** Que así las cosas ha de analizarse, en base a la prueba rendida en autos, si entre las demandadas existe dirección laboral común y si concurren otras condiciones como similitud o complementariedad de productos o servicios.

De las copias de las escrituras públicas agregadas bajo los Folios 25; 27; 35 y 42 de primera instancia, consta que el administrador y representante con facultades de usar la razón social de la totalidad de las sociedades demandadas, es don José Horacio Messen Gómez, por lo que el requisito de dirección laboral común ha de entenderse satisfecho, resultando evidente la similitud de servicios y de objeto social entre Sociedad Inversiones y Áridos San Vicente Limitada; Sociedad Áridos San Vicente Limitada, y Áridos e Inversiones San Vicente Limitada.

Por su parte, de los documentos de Folios 31 y 81, consistente en la inscripción de fojas 86 número 76, del Registro de Comercio de San Vicente, del año 2007, se desprende que Áridos e Inversiones San Vicente Limitada, representada por el señor José Horacio Messen Gómez, y José Horacio Messen Gómez, por sí, son los únicos socios e interesados en la Sociedad Inmobiliaria y de Inversiones M y G Limitada, lo que conduce a la conclusión que los servicios de una y otra persona jurídica se complementan.

A todo lo anterior debe sumarse que consta de los documentos anexos al informe pericial de Folio 150, que el camión placa patente ZK-4531 que transportaba acoplada la batea es de propiedad de la demandada Sociedad Transportes Messen Transporta Limitada, que la batea JF-2660, lo es de Áridos e Inversiones San Vicente Limitada, y como el actor prestaba servicios personales como mecánico para Sociedad Inversiones y



Áridos San Vicente Limitada, es posible tener por establecido que existe una relación de complementariedad entre dichas personas jurídicas.

**Décimo:** Que en base a lo anterior, concurren los presupuestos para que las demandas puedan ser estimadas como unidad económica y consideradas como un solo empleador, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 6º, del artículo 3, del Código del Trabajo, motivo por el cual han de responder solidariamente al actor de las indemnizaciones que a este le corresponden como consecuencia del accidente del trabajo ocurrido el 23 de octubre de 2018, como se dirá a continuación.

En base a las conclusiones anteriores, se declara:

**I.-** Que se **acoge**, con costas, la demanda de indemnización de perjuicios por accidente del trabajo interpuesta por don Rubén Alejandro Gallardo Leyton, y en consecuencia, se condena solidariamente a las demandadas Sociedad Inversiones y Áridos San Vicente Limitada; Sociedad Áridos San Vicente Limitada; Áridos e Inversiones San Vicente Limitada; Sociedad de Transportes Messen Transporta Limitada; y, Sociedad Inmobiliaria y de Inversiones M y G Limitada, a pagar al actor, como indemnización de los perjuicios ocasionados por el accidente del trabajo que lo afectó el 23 de octubre de 2018, la suma de cuarenta y nueve millones ciento cuarenta mil pesos (\$49.140.000) por concepto de lucro cesante, y la suma de diez millones de pesos (\$10.000.000) por concepto de daño moral.

**II.-** Que las sumas antes referidas deberán liquidarse en conformidad a lo establecido en el artículo 63 del Código del Trabajo, desde la fecha en que esta sentencia quede ejecutoriada.

Regístrese, comuníquese e incorpórese al sistema.

Redacción del abogado integrante Alberto Veloso Abril.

**Rol Corte 374-2021 Reforma Laboral.**

Ricardo De Dios Pairican Garcia  
MINISTRO  
Fecha: 07/09/2021 14:41:57

Joaquin Ignacio Nilo Valdebenito  
FISCAL  
Fecha: 07/09/2021 15:17:13

Alberto Salvador Veloso Abril  
ABOGADO  
Fecha: 07/09/2021 13:51:07



Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Rancagua integrada por Ministro Ricardo Pairican G., Fiscal Judicial Joaquin Ignacio Nilo V. y Abogado Integrante Alberto Salvador Veloso A. Rancagua, siete de septiembre de dos mil veintiuno.

En Rancagua, a siete de septiembre de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

